Ibagué, 16 de mayo de 2025.

Señor

JUEZ (REPARTO)

E.S.D

ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA.

Accionante: Juan David Yepes Hernández

Accionado: Fiscalía General de la Nación y Universidad Libre de Colombia.

Yo, Juan David Yepes Hernández identificado con cedula de ciudadan de Ibagué - Tolima actuando en causa propia, acudo a su Despacho en ejercicio de la ACCIÓN DE TUTELA consagrado en el Art. 86 de la Constitución Política en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Universidad Libre de Colombia, por cuanto estas entidades vulneraron mis derechos fundamentales de Igualdad, acceso a cargos públicos, debido proceso. Lo anterior lo fundamento en los siguientes:

HECHOS

1. La Fiscalía General de la Nación abrió una convocatoria para el concurso de méritos con el fin de proveer cargos dentro de la entidad. El proceso se llevó a cabo a través del Sistema de Información de Concursos y de Carrera Administrativa – SIDCA 3. El plazo de inscripción estuvo habilitado hasta el 22 de abril de 2025.
2. Durante el periodo habilitado para la inscripción, procedí a cargar los documentos en varias ocasiones debido a que, en algunos casos, la plataforma no guardaba correctamente el archivo que certificaba mis estudios o mi experiencia laboral. Este proceso se realizó siempre conforme a los requerimientos establecidos por la plataforma, asegurándome en todo momento de cumplir con todas las especificaciones indicadas en el documento *“GUÍA DE ORIENTACIÓN AL ASPIRANTE PARA EL REGISTRO, INSCRIPCIÓN Y CARGUE DE DOCUMENTOS”*.
3. Una vez cargados todos los documentos, realicé una verificación exhaustiva de cada

uno de los apartados correspondientes a experiencia y educación, tanto formal como informal, con el fin de asegurarme de que cada uno contara con su respectivo certificado.

4. A continuación, seleccioné el cargo correspondiente, en este caso el de **Asistente Fiscal Grado II**, con el código I-203-M-01-(529). Además, procedí a realizar el pago de los derechos de acuerdo con las indicaciones detalladas en el documento titulado "**Guía de Orientación al Aspirante para el Registro, Inscripción y Cargué de Documentos**".
5. Antes de proceder con el cierre de la plataforma SIDCA 3, realicé una nueva verificación en el apartado "**Cargué de Documentos**", específicamente en lo relacionado con la educación y los estudios, asegurándome de que cada uno de los certificados estuviera correctamente cargado, puesto que como lo indicaba el documento "**Guía de Orientación al Aspirante para el Registro, Inscripción y Cargué de Documentos**", una vez realizada la inscripción no permitiría cargar documentos adicionales.
7. Lo anterior puede verificarse en el **certificado de inscripción** emitido por la plataforma SIDCA 3:

-
8. Asimismo, en el apartado "Cargue de Documentos" se pueden visualizar los demás estudios formales e informales que se desean hacer valer para aplicar al cargo en cuestión, y fueron subidos dentro del término dispuesto por las accionadas, así como la experiencia laboral que se pretendía aportar:

Educación

9. El 8 de mayo, al darme cuenta de esta situación, procedí a radicar una PQR a través del apartado "**Agregar Solicitud de PQR'S**" del aplicativo SIDCA 3, en la cual solicité lo siguiente:

“Me permito la presente para informar que, una vez realizado el proceso de inscripción para el concurso de méritos, se presentó un inconveniente técnico. A pesar de haber efectuado el pago correspondiente y haber cargado todos los documentos requeridos para certificar tanto mis estudios formales e informales como mi experiencia laboral en la plataforma, dichos documentos no se reflejaron correctamente en mi perfil. Como resultado, mis datos no aparecen correctamente en el sistema, situación que puede ser corroborada mediante los pantallazos anexos y el certificado de inscripción emitido por la plataforma. A continuación, detallo los datos para facilitar la revisión de mi caso:

Nombre completo: Juan David Yepes Hernández

Código del empleo: I-203-M-01-(529)

Cargo al que se aspira: Asistente de Fiscal II

Solicito amablemente que se revise mi inscripción y, en caso de ser necesario, se habilite la posibilidad de cargar nuevamente los documentos.”

10. El 13 de mayo de 2025 la Fiscalía General de la Nación respondió en los siguientes términos:

“(…) Por lo anterior, es responsabilidad exclusiva de usted el no haber realizado el cargue de documentos en los términos establecidos, estos fueron del 21 de marzo al 22 de abril, 29 y 30 de abril del presente año, teniendo en cuenta que la aplicación estuvo funcionando en todo momento como ya se mencionó.

Por lo tanto, no existen fundamentos legales ni técnicos que autoricen o hagan procedente la admisión de documentos fuera de las fechas establecidas. A este respecto, se reitera que el principio de igualdad impide otorgar condiciones excepcionales individuales que alteren las reglas generales del concurso.

Es de iterar, que la etapa de inscripciones se encuentra cerrada y no es posible adjuntar documentos, tal como se menciona en el segundo del numeral 5 párrafo artículo 15.

Con los anteriores argumentos fácticos y legales, consideramos que la U.T. Convocatoria FGN 2024 ha respondido de manera adecuada, efectiva, clara y concreta la petición impetrada por usted, en cumplimiento de lo establecido en la Ley.

La presente respuesta se comunica a través del medio por el cual se recibió su solicitud, esto es a través del aplicativo SIDCA3 de acuerdo con lo previsto en el Artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.”

DERECHOS VULNERADOS

- Derecho de petición (Art. 23 C.N.).
- Derecho al trabajo (Art. 25 C.N.).
- Derecho a la igualdad (Art. 13 C.N.).
- Derecho al acceso a cargos públicos (Art. 40.7 C.N.).
- Derecho al debido proceso administrativo (Art. 29 C.N.).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 86 de la Constitución establece la acción de tutela como mecanismo eficaz para proteger derechos fundamentales cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

La Corte Constitucional ha establecido en Sentencia C – 319 de 2010 que:

“El principio constitucional de igualdad de oportunidades en acceso a cargos públicos apunta a que todo ciudadano tiene derecho a desempeñar funciones y cargos públicos en igualdad de condiciones, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha ratificado el Estado colombiano, principio que se encuentra garantizado, a su vez, mediante un conjunto de reglas constitucionales según las cuales los empleos en los órganos y entidades del Estado son, por regla general, de carrera; los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público; el ingreso a la carrera administrativa y los ascensos serán por méritos en tanto que el retiro se dará únicamente por calificación no satisfactoria

en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario “y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley”.

Para el caso concreto, las fallas técnicas observadas de manera reiterada en la plataforma dispuesta para la inscripción a la convocatoria pública de empleo de la Fiscalía General de la Nación, así como la imposibilidad de comunicarse a través del operador dispuesto para ello, constituyen barreras para el ejercicio adecuado de los derechos fundamentales vulnerados a este accionante.

En relación con la procedibilidad acción de tutela contra entidades particulares, ha reiterado la jurisprudencia (Sentencia T-195/22) que:

“Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por objeto garantizar la “protección inmediata de los derechos fundamentales” de las personas por medio de un “procedimiento preferente y sumario” [53]. De acuerdo con lo previsto por el Decreto 2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de esta Corte, son requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: (i) la legitimación en la causa, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad. El cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez de tutela pueda emitir un pronunciamiento de fondo. En este sentido, a continuación, la Sala examinará si la solicitud de tutela estudiada en el presente caso satisface tales exigencias.”

Respecto de la acción de tutela como mecanismo para controvertir las decisiones de los concursos de méritos, ha señalado la honorable Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos, que en principio es el juez de lo contencioso administrativo el llamado a dirimir las diferencias que puedan suscitarse dentro del desarrollo de tal trámite, no obstante, requiere al juez constitucional para realizar un examen especial en punto de establecer si el agotamiento de esa posibilidad, traería como consecuencia el acaecimiento de un perjuicio irremediable.

Según la sentencia T-081/2001, explicó el Alto Tribunal lo siguiente:

“... 55. Subsidiariedad. Esta Corte, de modo reiterado, ha dispuesto que la acción de tutela solo procede si quien acude a ella no cuenta con otro procedimiento judicial en el ordenamiento jurídico que permita la resolución de sus pretensiones. Por supuesto, esta regla tiene por objeto evitar que aquellos mecanismos sean sustituidos por se por este medio célere e informal. En tal sentido, en caso de existir un medio judicial principal, el actor tiene la carga de acudir a él toda vez que es necesario preservar las competencias legales asignadas por el legislador a cada jurisdicción [96], salvo que se demuestre que el mismo no goza de idoneidad o

eficacia, o que se evidencie un perjuicio irremediable en cuya virtud sea necesario un amparo transitorio [97]. Negrilla de este Despacho.

56. Así, prima facie, este Tribunal ha considerado que la acción de tutela no procede cuando a través de su uso se pretenda atacar decisiones proferidas por la Administración en el marco de un concurso de méritos, pues, el legislador de estableció mecanismos especiales en uso de los cuales el juez de lo contencioso administrativo estaría llamado a conocer de esos asuntos [98]. Allí podría solicitarse, además, la puesta en marcha de medidas cautelares si es que la protección del bien es urgente y no soportaría el tiempo que tarde la resolución del litigio [99]. Sin embargo, siguiendo lo advertido en el párrafo anterior, puede que, en algunos supuestos, a la luz de las circunstancias particulares ofrecidas en el caso, se advierta que este medio judicial no es idóneo ni eficaz. Escenario en el que la acción de tutela devendrá procedente [100].

57. Vistos los hechos probados que rodean ambos casos, la Sala estima que, por lo menos a primera vista, era deber de los actores acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que allí se dirimiera el conflicto suscitado. En efecto, ambos tutelantes, al momento en que instauran sus respectivas acciones de tutela, cuestionaron, por lo menos, dos decisiones de la CNSC, a saber:

...59. Ahora bien, un proceso judicial ante la jurisdicción contenciosa es ciertamente más dispendioso que el previsto para tramitar una acción de tutela [104], pero esta simple consideración no hace ineficaz ese medio judicial principal. En virtud de lo previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contenido en la Ley 1437 de 2011, los procesos declarativos de dicha jurisdicción involucran la posibilidad de medidas cautelares con las cuales se puede alcanzar la protección del objeto del proceso, ya sea por solicitud de las partes y/o decretadas de oficio por el juez.”

SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL

De manera respetuosa, solicito al despacho que se conceda una medida cautelar mientras se resuelve de fondo esta acción de tutela, ordenando a la Fiscalía General de la Nación y/o a la entidad responsable del concurso, reservar un cupo o permitir la inscripción condicional hasta que se adopte una decisión definitiva sobre la presente acción.

En Auto 555 de 2021, la Corte Constitucional estableció que:

“las medidas provisionales son órdenes preventivas que el juez de tutela puede adoptar, (...) mientras toma una decisión definitiva en el asunto respectivo, con el propósito de evitar que la amenaza que se cierne sobre un derecho fundamental

se convierta en una vulneración o que la afectación se vuelva más gravosa (...)
(Negrillas fuera de texto original).

La Corte de igual manera ha sostenido, en Sentencia T-182 de 2021 que:

“la Constitución Política propende por un sistema de vinculación al servicio público fundado -principalmente- en el mérito, el concurso constituye el mecanismo que, por regla general, rige la incorporación a los empleos y cargos del Estado. En ese sentido ha señalado que el ingreso y el ascenso a los cargos de carrera debe ser el resultado de procedimientos de esta naturaleza.”

Procedimiento que para el caso concreto se ve truncado, por fallas en la plataforma, al impedirme la inscripción en la misma. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 y en las reglas jurisprudenciales mencionadas, solicito se adopte esta medida provisional.

PRETENSIONES.

1. Tutelé mis derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos.
2. En consecuencia, solicito que se ordene a la Fiscalía General de la Nación y a la Universidad Libre de Colombia habilitar correctamente la recepción y el funcionamiento de la plataforma SIDCA 3 para el cargue de los soportes, con el fin de completar los requisitos necesarios para el cargo.
3. En caso de no ser posible habilitar la plataforma, solicito que se indique un canal alternativo para remitir la información o se adopte una solución que garantice el principio de igualdad durante la etapa de verificación de requisitos, permitiéndome contar con las mismas oportunidades de acceso al cargo.

ANEXOS.

1. Certificado emitido por la plataforma SIDCA3
2. PQR presentado a la Fiscalía
3. Respuesta de la Fiscalía
4. Documento de identidad

JURAMENTO.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que por los mismos hechos y derechos no he

presentado una petición similar ante ninguna autoridad judicial.

Del señor Juez,

JUAN DAVID YEPES HERNANDEZ